



Ágora

¿Trinchar el país?

Catalunya ha aplazado decisiones mientras los reactores nucleares garantizaban la electricidad. Esta comodidad tiene fecha de caducidad



Emilio Palomares

Hay expresiones que tienen la virtud de liquidar un debate antes de que empiece. *Trinxar el país* es una de ellas. ¿Quién puede estar a favor de trinchar Catalunya? Nadie. Por tanto, si desplegar energía renovable equivale a trinchar el territorio, la discusión está resuelta: moratoria, paramos los proyectos y salvamos el país. El problema es que, después, hay que encender la luz.

Y los hospitales, las escuelas, los trenes, las fábricas, los centros de investigación, los comercios y nuestras casas necesitan electricidad. Más importante: si queremos descarbonizar la economía, necesitaremos más. Electrificar la movilidad, sustituir procesos industriales basados en combustibles fósiles o producir hidrógeno renovable no significa consumir menos electricidad, sino consumir más y producirla sin emisiones. Este es el debate que tendríamos que tener sobre el Plater.

Catalunya parte de una situación incómoda. Ha desplegado renovables más lentamente que otros territorios y continúa dependiendo de la energía nuclear. Más de la mitad de la electricidad catalana procede de los reactores y, al mismo tiempo, hemos decidido que tienen que cerrar.

Es una decisión legítima, pero la aritmética energética existe. No podemos cerrar las nucleares, electrificar la industria, descarbonizar el transporte, atraer nuevas inversiones, construir centros de datos y decidir que los aerogeneradores molestan, que las placas fotovoltaicas ocupan territorio, que los tendidos eléctricos alteran el paisaje y que cada proyecto que supera las dimensiones de una instalación doméstica merece una moratoria.

La respuesta habitual es que pongamos las placas en los tejados, en los polígonos industriales, en los aparcamientos y en espacios *antropizados*. Pero esto no resuelve las necesidades de un país industrializado. Una economía moderna necesita generación, almacenamiento, redes, interconexiones y capacidad suficiente para garantizar electricidad cuando la industria la necesita, no solo cuando hace sol



Pau Gracià

Placas solares fotovoltaicas en el Hospital del Mar de Barcelona.

encima de un tejado.

Hay otra posibilidad: podemos decidir no producir aquí la energía que consumimos e importarla. Podemos pedir a Aragón o en otros territorios que instalen los aerogeneradores y ocupen suelo con fotovoltaica para después construir líneas de alta tensión hacia Barcelona, Tarragona o Girona. Es una opción política, pero habría que decirlo explícitamente. Entonces, el debate deja de ser entre quienes aman al territorio y quienes lo quieren *trinxar*, y pasa a ser entre diferentes maneras de asumir las consecuencias territoriales de nuestro consumo. ¿Por qué una comarca que consume más de lo que produce tendría que tener más derecho a preservar su paisaje que una comarca rural que acaba produciendo la electricidad que aquella necesita?

Esto no significa poner placas y aerogeneradores en cualquier lugar. Necesitamos planificación para decidir dónde se pueden instalar y dónde no, protegiendo espacios naturales, patrimonio, biodiversidad y suelos agrícolas valiosos, además de compensar a los municipios productores. Y hay que discutir los mapas del Plater, corregirlos y escuchar a los ayuntamientos. Lo que cuesta entender es que la respuesta a cualquier planificación sea una moratoria.

Catalunya ha practicado durante años una política energética basada en aplazar decisiones mientras los reactores nucleares garan-

tizaban la electricidad. Esta comodidad tiene fecha de caducidad y el calendario no se para.

Además, la energía es política industrial. Europa está descubriendo qué significa tener una industria que compite con regiones del mundo donde la energía es más barata. La química, la siderurgia, el cemento o el papel necesitan electricidad abundante, estable y competitiva. Cuando una fábrica cierra porque producir aquí deja de ser competitivo, desaparecen salarios, proveedores, impuestos y capacidad productiva con la que financiamos hospitales, escuelas y pensiones.

Afrontamos una transformación de una magnitud comparable a la revolución industrial: sustituir un sistema fósil por otro electrificado y descarbonizado. Esta transición ocupará espacio. La cuestión racional no es conseguir una transición sin impacto (esto no existe), sino decidir democráticamente qué impacto aceptamos, dónde lo aceptamos y cómo lo minimizamos mientras garantizamos la energía necesaria.

Quizás la pregunta no es si las renovables machacarán a Catalunya. La pregunta es qué quedará de la Catalunya industrial si continuamos pensando que podemos consumir energía sin producirla. ■

■ Emilio Palomares es director ICIQ e investigador ICREA